



Consejo Económico y Social

Distr. general
15 de diciembre de 2015
Español
Original: inglés

Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer

60º período de sesiones

14 a 24 de marzo de 2016

Seguimiento de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, titulado “La mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI”

Declaración presentada por la Internacional de la Educación, la Confederación Sindical Internacional y la Internacional de Servicios Públicos, organizaciones no gubernamentales reconocidas como entidades consultivas por el Consejo Económico y Social*

El Secretario General ha recibido la siguiente declaración, que se distribuye de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 36 y 37 de la resolución 1996/31 del Consejo Económico y Social.

* La presente declaración se publica sin revisión editorial.



Declaración

Organización para el empoderamiento social y económico de las mujeres para 2030

Una de las razones principales por las que las mujeres se unen a los sindicatos es para hacerse cargo de su propio empoderamiento social y económico mediante su organización y negociación colectiva para un trabajo decente. Hay 70 millones de mujeres en todo el mundo que están representadas en sindicatos; como consecuencia, los sindicatos son partes interesadas y agentes clave para asegurar el cumplimiento de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030.

Como federaciones sindicales mundiales, nosotros, la Confederación Sindical Internacional, la Internacional de Servicios Públicos y la Internacional de la Educación, hacemos un llamamiento a los interlocutores sociales, a los Estados y a los agentes del sector privado para que aseguren que la aplicación de los objetivos revierta las desigualdades crecientes y consiga la equidad mediante una transición a economías y sociedades ecológicamente sostenibles. Solicitamos, por tanto, que se invierta en el acceso universal a servicios públicos de calidad, entre los que se incluyen la asistencia sanitaria y la seguridad de los ingresos básica para proteger el nivel de vida de los enfermos, los desempleados, las personas con discapacidad y las personas de edad avanzada, así como aquellos que son incapaces de trabajar porque están al cuidado de niños o familiares enfermos. Pedimos que se invierta en educación gratuita, equitativa, de calidad, sin costos ocultos, que preste especial atención a los más marginados y vulnerables, que con demasiada frecuencia son niñas y mujeres. Reclamamos inversión en la creación de trabajo decente, que incluya la formalización de trabajos informales, como la manera más sostenible de empoderamiento económico para las mujeres.

Para muchos pequeños Estados insulares en desarrollo y países menos adelantados, el impacto del cambio climático (Objetivo 13) ahora es una cuestión de supervivencia básica. Las nuevas directrices de los mandantes tripartitos de las Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo para una transición justa hacia economías ecológicamente sostenibles resaltan la necesidad de que los Estados promulguen y apliquen políticas que promuevan la creación de trabajos más decentes, para lo cual es necesario “prever la repercusión en el empleo y favorecer una protección social adecuada y sostenible frente a la pérdida de empleos y los desplazamientos, así como el desarrollo de competencias y el diálogo social, incluido el ejercicio efectivo del derecho de sindicación y de negociación colectiva”. Todas estas políticas también deben tener en cuenta las dimensiones de género de los retos ambientales y se requieren políticas específicas de género para promover resultados equitativos.

Los servicios públicos esenciales, que incluyen agua, saneamiento, salud y educación, deben excluirse de asociaciones públicas/privadas, financiamiento combinado y acuerdos comerciales, ya que dichas iniciativas tienen un impacto extremadamente negativo sobre los derechos sociales de las mujeres. La justicia fiscal y los modelos de tributación progresiva pueden proporcionar una base alternativa sólida para las políticas públicas necesarias para lograr la igualdad de género.

La consecución del Objetivo 4 de una educación inclusiva y equitativa de calidad y del aprendizaje permanente depende de la eliminación de las barreras estructurales y las normas de género arraigadas sobre las que se apoya la desigualdad de género. Esto requiere cierto grado de cambio legislativo en la mayoría de los Estados Miembros, que se debe acompañar de una defensa y una fuerte movilización comunitaria para generar apoyos para la educación de las niñas y eliminar las barreras persistentes, entre las que se incluyen el embarazo precoz y no planificado, el matrimonio infantil y la violencia por razón de género en las escuelas, sus alrededores y otros ambientes educativos.

La consecución de los objetivos y metas educativos depende igualmente de que los Estados inviertan en la contratación y formación de profesores y personal de apoyo educativo procedentes de un amplio abanico de trasfondos, con objeto de reflejar la diversidad de los estudiantes. En algunos contextos, esto implica centrarse en las profesoras para mantener a las niñas en la escuela y mejorar su participación en la educación.

Debe haber una acción estatal concertada para eliminar la división del trabajo en función del sexo, que apuntala la desigualdad salarial por razón de género, y para acabar con todo sesgo de género en la legislación y en las prácticas de evaluación laboral y compensación del trabajo. Para conseguir el Objetivo 8 de trabajo decente y protección social, y para estar a la altura de sus compromisos para la mejora significativa de la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo, los Estados también deben ajustarse a las Iniciativas del centenario de la OIT sobre las mujeres en el trabajo y al compromiso de los líderes del G20 de reducir en un 25% la diferencia de participación en la fuerza de trabajo según el género para 2025.

Estos son los cuatro pilares del trabajo decente, según ha acordado la OIT: 1) la creación de trabajo, 2) los derechos de los trabajadores, 3) la protección social y 4) el diálogo social. Estos forman una base sólida para construir una agenda económica para las mujeres como parte de un plan de empleo y crecimiento, que valora el trabajo remunerado y no remunerado de las mujeres y tiene por objeto aumentar la participación de las mujeres en el trabajo, con el apoyo de los servicios públicos de cuidado de niños y ancianos, y entornos laborales que favorecen a la familia. La inversión en servicios de atención pública puede crear millones de trabajos decentes y apoyar la participación de las mujeres en el trabajo remunerado.

Se requiere un compromiso serio, respaldado por la acción, para transformar los empleos informales y con fines de explotación en trabajos decentes para las mujeres; esta es la manera más rápida y sostenible de impulsar el crecimiento y la productividad. El 60% del comercio mundial depende de contratos en las cadenas de suministro en las que la mayoría de los trabajadores son mujeres, demasiadas de las cuales siguen viviendo por debajo del umbral de pobreza, además de enfrentarse a la violencia y los malos tratos en su lugar de trabajo.

La violencia por razón de género es una manifestación de las relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres. La violencia doméstica o “contra la pareja” tiene un claro impacto en el lugar de trabajo, que se manifiesta en el absentismo, la pérdida de productividad y seguridad laboral para las víctimas, y el mal uso de los recursos de la empresa por parte de los autores. Asimismo, las diferencias entre la exposición de hombres y mujeres al riesgo de formas específicas de violencia en el lugar de trabajo se refuerzan mediante los lugares de trabajo con segregación en función del sexo. Los sindicatos están al frente de los esfuerzos para

erradicar la violencia por razón de género en el trabajo y actualmente están haciendo campaña a favor de un nuevo convenio de la OIT para abordar las distintas formas de violencia por razón de género que se producen en el lugar de trabajo.

Las mujeres de los sindicatos abogan y negocian de forma colectiva por un salario mínimo vital, protección social que incluya licencia parental remunerada, la regulación del horario laboral y medidas para combatir la violencia y la discriminación, entre otras cosas. El trabajo de las mujeres dentro de los sindicatos no solo incrementa el empoderamiento económico y la seguridad de todas las mujeres, sino que también contribuye a aumentar la representación de las mujeres en la vida pública. Las mujeres de los sindicatos han asegurado una representación de entre un 30% y un 50% de mujeres en puestos de liderazgo y toma de decisiones en las estructuras sindicales y han movilizado el apoyo de un número de hombres cada vez mayor para que se conviertan en líderes de la consecución de la igualdad de género.

Los derechos fundamentales, tales como la libertad de reunión, asociación y expresión, que forman los pilares de las sociedades democráticas y permiten que los trabajadores y ciudadanos tengan voz en la toma de decisiones, son objeto de ataque en la mitad de los Estados del mundo. Se están introduciendo barreras jurídicas e institucionales en todas las regiones para penalizar la protesta social y el derecho a huelga. Esto ha reforzado la desigualdad de las mujeres, sobre todo de las mujeres marginadas por racismo, colonialismo, discriminación contra las personas con discapacidad, edadismo, homofobia, transfobia y otras formas de opresión porque las normas culturales y las relaciones de poder desequilibradas determinan quién participa en la vida económica y política, y quién se queda al margen. Mediante la negociación colectiva, los sindicatos reducen las desigualdades al aumentar los mínimos salariales y contribuir a la reducción de la pobreza y a las economías sostenibles. Los gobiernos deben respetar las libertades de asociación, expresión y reunión, y los derechos de negociación colectiva y huelga.

El proceso de aplicación y examen de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel nacional debe ser verdaderamente participativo. El diálogo social, que reúne a los interlocutores sociales (organizaciones de empleadores y trabajadores), es un ejemplo excelente de cómo asegurar el sentido de propiedad respecto de los procesos de formulación de políticas a nivel nacional y se debería utilizar en cualquier momento y lugar posibles. Los procesos de seguimiento y examen deben integrar instrumentos para pedir cuentas a las empresas a todos los niveles. Se deben introducir reglamentos claros o mejorar los existentes para asegurar que las intervenciones del sector privado concuerden con el interés público, sobre todo en los ámbitos en que los recursos públicos se usan para apoyar al sector privado. Por consiguiente, los mecanismos de seguimiento y examen también deben evaluar la contribución del sector privado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre otras cosas mediante la adhesión a las normas ambientales y laborales internacionales.

Creemos que “el lugar de una mujer está en su sindicato”: las mujeres desempeñan un papel de liderazgo dentro de los sindicatos, asegurando que los sindicatos negocien condiciones laborales que tengan en cuenta los derechos y necesidades de las mujeres. Trabajan de forma sistemática a favor de la reforma de la legislación y el cambio social con sus hermanas de los movimientos de mujeres, y para que los Estados rindan cuentas de las promesas formuladas. Las mujeres en los

sindicatos también garantizan que se ponga en cuestión la desigualdad salarial por razón de género mediante la negociación colectiva.

Las mujeres en los sindicatos, en alianza con los movimientos de mujeres y los gobiernos que prestan apoyo, entre los que se incluyen los Amigos del Trabajo Decente y las coaliciones del Pacto Mundial, en colaboración con la OIT, asegurarán una vigilancia y aplicación eficaces de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en relación con los servicios públicos de calidad, entre los que se incluyen la educación equitativa gratuita para todos, el trabajo decente para las mujeres y la continuación de sus derechos al diálogo social y la negociación colectiva.
